



Juzgado de lo Social nº 1 de Reus

Avenida Marià Fortuny, 73 - Reus - C.P.: 43204

TEL.: 977128100
FAX: 977128101
E-MAIL:

N.I.G.: 4312344420150003223

Seguridad Social en materia prestacional 674/2015-A

Materia: Seguridad Social

Cuenta BANCO SANTANDER:

Beneficiario: Juzgado de lo Social nº 1 de Reus

Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Parte demandante/ejecutante: TERESA B. [REDACTED] M. [REDACTED]
Parte demandada/ejecutada: INSS

SENTENCIA Nº 441/2016

En la ciudad de Reus, a 21 de noviembre de 2016.

Vistos por el Magistrado-Juez del **Juzgado de lo Social número 1 de Reus**, Juan Manuel Fernández Pérez, los precedentes autos número **674/2015**, seguidos a instancia de **Dª TERESA B. [REDACTED] M. [REDACTED]** frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre prestación de viudedad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 21 de septiembre de 2015 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Con arreglo al señalamiento comunicado a las partes, el acto de juicio se celebró en fecha 9 de noviembre de 2016, al que comparecieron la parte demandante y demandada, con la asistencia profesional que consta en el acta constituida al efecto.

En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su





demanda; el INSS se opuso por las razones de hecho y derecho que fundamentan la resolución impugnada, proponiendo, para el caso de una eventual estimación de la demanda, una base reguladora de 517,54 euros, un porcentaje del 52% y una fecha de efectos del 1 de noviembre de 2014.

Se practicaron a continuación las pruebas propuestas y admitidas: en el caso de la parte actora, la reproducción de los documentos acompañados a la demanda y la declaración de tres testigos; por parte de la entidad gestora, la aportación en ese momento del expediente administrativo.

En conclusiones las partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este juzgado dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando luego los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- D^a TERESA B. [REDACTED] mayor de edad y con DNI nº [REDACTED], contrajo matrimonio con D. Juan Manuel P. [REDACTED] en fecha 21 de enero de 1977. Fruto de esa unión, nacieron cuatro hijas, T. [REDACTED], M. [REDACTED], V. [REDACTED] y M. [REDACTED] (folios 73 a 75)

SEGUNDO.- La actora ha sido objeto de violencia física y psicológica continuada por parte del causante durante, al menos, los diez años que precedieron a la separación matrimonial. En concreto, le golpeaba, le abofeteaba, le arrojaba objetos, le tiraba del cabello, le insultaba y le expulsó en varias ocasiones del domicilio conyugal, junto a sus cuatro hijas. Esa situación se mantenía a fecha de la separación judicial (declaración de la hija de la actora y de los hermanos del causante, folios 80 a 82, 124 a 135, 153 y 154)

TERCERO.- En los años 1993 y 1994, la actora interpuso varias denuncias contra su cónyuge por agresiones físicas, insultos y maltrato, dado lugar a diferentes Diligencias Previas, entre ellas las 1181/1993 y 1184/1993, que se convirtieron en el juicio de faltas nº 177/1993, en cuyo acto el ministerio fiscal solicitó su transformación en diligencias previas (nº 412/1994), con sobreseimiento posterior en septiembre de 1994 (folios 124 a 135). En declaración de 19 de abril de 1994, vertida ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Reus, el Sr. P. [REDACTED] M. [REDACTED] reconoció haber abofeteado e insultado a la actora, debido a problemas con la bebida (folios 153 y 154). En el





mes de mayo de 1995, la actora interpuso una denuncia contra su cónyuge por maltrato continuado a ella y a las hijas comunes de ambos, con frecuentes agresiones físicas, insultos y abusos psicológicos (folios 80 a 82)

CUARTO.- Mediante auto de 20 de octubre de 1995, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Reus decretó la separación provisional de la actora y el Sr. Pérez Martín, atribuyendo el uso y disfrute del domicilio conyugal a la actora y fijando régimen de visitas (folios 77 y 78). En fecha 29 de abril de 1999, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Reus dictó sentencia estimando la demanda interpuesta por la actora y declarando la separación definitiva del matrimonio. En la sentencia se estableció una pensión de alimentos de 20.000 pesetas mensuales (folios 83 a 92)

QUINTO.- En fecha 11 de octubre de 2014, D. Juan Manuel Pérez Martín falleció por una enfermedad común (folio 76)

SEXTO.- En fecha 2 de enero de 2015, la actora formuló ante el INSS solicitud de prestación de viudedad (folios 37 a 40)

SÉPTIMO.- En fecha 21 de enero de 2015, el INSS dictó resolución denegando la prestación de viudedad "por haber transcurrido un período de tiempo superior a diez años entre la fecha de separación judicial y la fecha de fallecimiento del causante de la pensión de viudedad" (folio 41)

OCTAVO.- Contra dicha resolución la actora interpuso la oportuna reclamación previa en fecha 27 de febrero de 2015, alegando que la separación de su marido se debió a malos tratos (folio 42). En fecha 3 de marzo de 2015, el INSS solicitó a la actora que aportara sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento y, en defecto de sentencia, orden dictada a su favor o informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en derecho (folio 141)

NOVENO.- La reclamación previa fue expresamente desestimada mediante nueva resolución del INSS de 2 de julio de 2015, por haber transcurrido un período de tiempo superior a diez años entre la fecha de divorcio o separación judicial y la fecha de fallecimiento del causante de la pensión de viudedad, y por no haberse acreditado que la interesada fuera víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o divorcio (folio 45).

DÉCIMO.- La base reguladora de la prestación postulada por la parte actora asciende a 517,54 euros y el porcentaje de aplicación al 52% (folio 44 y fundamento jurídico primero)





FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- Valoración de la prueba.

En cumplimiento de lo exigido en el apartado segundo del artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe hacerse constar que, los anteriores hechos son el producto de la valoración conjunta de la prueba documental y testifical practicada en las presentes actuaciones, con expresa reseña en cada uno de los ordinales.

Los únicos hechos controvertidos de esta sentencia son el segundo y el octavo. El segundo es el resultado de la valoración de los testigos propuestos por la parte actora, en conexión con los procedimientos promovidos por ella con ocasión de los malos tratos de los que fue objeto por parte de su cónyuge. Es cierto que el primero de los testigos era hija de la actora y que podía albergar un interés directo, entendido como aprovechamiento personal, en el resultado del pleito. Pero los otros dos testigos eran hermanos del causante, sin ningún vínculo actual de parentesco con la actora y con un interés remoto (más bien al contrario) en favorecer a la actora. Los tres declararon que el fallecido, debido a frecuentes intoxicaciones alcohólicas, golpeó, vejó, insultó y maltrató a la actora, al menos, durante un período de diez años. Esa versión de los hechos viene confirmada por las diferentes denuncias interpuestas por la actora en sede judicial y policial y, sobre todo, por una declaración del causante en la que reconoce haber golpeado e insultado a la actora (folios 153 y 154), además de un parte médico de lesiones. Es cierto que ninguna de esas denuncias desembocó en una condena judicial, tal y como destacó la entidad gestora demandada. Pero, en función de la prueba practicada, este juzgador no abriga la menor duda de que la actora fue víctima de violencia doméstica de modo continuado hasta que se acordó la separación provisional de ambos cónyuges.

El hecho cuarto, atinente a la base reguladora, resulta de la información que figura en la resolución denegatoria de la reclamación previa y que no ha sido objeto de confrontación, y es que el causante percibía una pensión de incapacidad permanente en grado de absoluta con una base reguladora de 517,54 euros, que debe coincidir necesariamente con la de la prestación de viudedad. Del mismo modo, no se ha alegado causa alguna para que el porcentaje de la prestación sea diferente al ordinario del 52%. Otra cosa sea el importe exacto de la prestación, que dependerá de varios factores que ahora no corresponde examinar, sin perjuicio de que una ulterior discrepancia deba valorarse en fase de ejecución.





SEGUNDO.- Posición de las partes y ámbito de enjuiciamiento.

La parte demandante pretende el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad en virtud de su condición de víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial. Postula una pensión de 592 euros mensuales, alegando que es la que corresponde en el año 2014 a personas mayores de 60 años.

La entidad gestora denegó en un primer momento la prestación solicitada por la actora por haber transcurrido un período de tiempo superior a diez años entre la fecha de separación judicial y la fecha de fallecimiento del causante de la pensión de viudedad. Lo cierto es que, en su solicitud inicial, la actora no hizo referencia a su posible condición de víctima de violencia doméstica, por lo que la resolución del INSS no puede ser tachada de irrazonable. Esta cuestión se suscitó por primera vez en la reclamación previa, lo que motivó que la entidad gestora requiriera a la actora para que aportara la documentación a la que se refiere el artículo 174.2 de la LGSS (vigente al momento del hecho causante). La parte actora aportó determinada documentación judicial y policial, pero la entidad gestora resolvió que era insuficiente en orden a acreditar que fuera víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial, todo ello con fundamento en el referido precepto y la Disposición Transitoria 18ª de la LGSS.

TERCERO.- Normativa aplicable. Viudedad, separación y violencia de género.

La presente controversia debe resolverse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por Ley 40/2007, del siguiente tenor:

2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

Por otra parte, la Disposición Transitoria Décimo Octava de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, dispone lo siguiente:

El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley,





cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un período de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concorra en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes:

- a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o
- b) que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión.

La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social.

En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.

En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social.

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, de esta Ley.

CUARTO.- Resoluciones del INSS de 21 de enero y 2 de julio de 2015. Acreditación de la condición de víctima de violencia de género.

Según el contexto normativo expuesto debería concluirse que la actora no reúne, prima facie, los requisitos para lucrar la prestación de viudedad, toda vez que la sentencia que acordó la separación matrimonial no fijó pensión compensatoria y que entre la misma (29 de abril de 1999) y el fallecimiento del causante (11 de octubre de 2014) han transcurrido más de dos años.

No obstante, en su demanda, la parte actora sustenta su petición en haber sido víctima de violencia de género cuando sobrevino la separación judicial. Por tanto, el fundamento básico de la pretensión aquí ejercitada descansa en la propia literalidad del artículo 174.2 de la LGSS en relación con la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En efecto, el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social excepciona el requisito de la pensión compensatoria cuando la solicitante acredite que era víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Igualmente, el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, regula la acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras en los siguientes términos: Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente,





será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

Por tanto, lo que debe decidirse aquí es si la actora ha acreditado el haber sido víctima de violencia de género en los términos prevenidos legalmente. Esta cuestión ha sido objeto de conocimiento por parte del Tribunal Supremo. Así, en su sentencia de 30 de mayo de 2011 (RJ\2011\5108) resuelve un recurso de casación en el que se suscita tal cuestión y lo hace con el siguiente argumentario:

Aunque la sentencia recurrida en este punto dice que en la de instancia solo se contiene "la somera mención de que hubo actuaciones penales contra el fallecido esposo", lo que impide introducir en el debate esta cuestión, la realidad es que, como afirma el Ministerio Fiscal en su informe, la sentencia de instancia en su hecho probado segundo afirma que "constan en autos actuaciones penales de la actora contra su esposo, que igualmente se tienen por reproducidas" lo que permite su análisis por remisión, o, lo que es lo mismo, esas actuaciones penales se han de tener por incorporadas a los hechos probados, razón por la que en el primero de los fundamentos de esta sentencia se describieron esas actuaciones de forma detallada. Ciertamente que en ellas no existe una sentencia en la que se contenga una condena por delito de violencia de género, pero la norma permite que en su defecto, esa situación se ponga de manifiesto a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, "así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho."

Pues bien, de la lectura de esas actuaciones penales se desprende con claridad que la demandante estuvo sometida antes de la sentencia de separación a una situación de coacciones, injurias, insultos y amenazas que constan en esas actuaciones, por lo que aplicando la previsión legal de que esa situación de violencia pueda acreditarse por "por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho", como se evidencia de la sentencia del Juzgado de Tomelloso de 22 de marzo de 1.995, con el complemento útil que supone también la lectura del escrito de calificación del Ministerio Fiscal en aquella causa.

Además, aunque las actuaciones penales posteriores no pueden tener relevancia directa en la apreciación de la existencia de esa violencia de género, puesto que el artículo 174.2 exige que esa situación se evidencie en el momento de la separación o divorcio, realmente tienen utilidad para conocer el alcance que tuvieron aquellas amenazas, aquellas injurias anteriores a la separación y que culminaron en un desafortunadamente típico proceso de violencia posterior a esa separación, como fue la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Tomelloso de fecha 20 de febrero de 2.004 en la que se condenó nuevamente al causante como autor de una falta de respeto prevista en el artículo 620 del Código Penal, declarándose probado para ello que "el día 7 de septiembre de 2.003 el denunciado amenazó a la Sra. Ramona con matarla y le dijo que no se le ocurriera irse con otro, que ella era suya", o que ante la actitud amenazante del Sr. Héctor, por auto de 12 de febrero de 2.004 del Juzgado nº 1 de Tomelloso adoptó la medida cautelar de allanamiento, extendida en otro auto de 20 de febrero.

Por ello, de conformidad con lo razonado y aplicando el precepto que se discute, el artículo 174.2 LGSS, no resultaba exigible a la demandante para acceder a la pensión de viudedad del requisito de ser acreedora de pensión compensatoria que se extinguiese con el fallecimiento, puesto que la norma contempla y excluye su situación de tal requisito.

Esa doctrina unificada ha sido trasladada sin matices a la de suplicación en diferentes sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 13 de noviembre de 2014 (AS\2015\82), en la que se dice:

A los meros efectos dialécticos, cabe añadir que, tal como hemos reiterado en anteriores resoluciones (sentencias de esta Sala de 8 de enero de 2.014 -recurso 3566/2013 - y 27 de





marzo de 2.014 -recurso 5476/2013 -), el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite que la condición de víctima de violencia de género resulte acreditada "por cualquier medio de prueba admitido en derecho, en los supuestos de ausencia de sentencia penal, orden de protección, o informe del Ministerio Fiscal". Y en la presente litis tal prueba no se ha limitado a la simple denuncia (en todo caso, múltiple), sino que ha venido acompañada de parte médico de urgencias, al que la juzgadora a quo ha otorgado plena virtualidad probatoria.

Partiendo de ello, la condición de víctima de violencia de género en el momento de la ruptura matrimonial de la actora le exime de resultar beneficiaria de pensión compensatoria en aras a lucrar la pensión interesada.

En idéntico sentido, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 15 de octubre de 2013 (JUR\2014\117482), de Andalucía de 6 de marzo de 2014 (AS\2014\1343) o de Castilla y León de 23 de febrero de 2016 (AS\2016\454). En esta última sentencia se razona lo siguiente:

Tiene razón la parte recurrente cuando alega que no se ha constatado la existencia de una sentencia firme, de un archivo de la causa, de una orden de protección o de un informe del Ministerio Fiscal; pero el precepto indicado no establece un catálogo cerrado de medios que permiten acreditar la violencia de género, sino que en su redacción incluye una cláusula general que autoriza el uso de "cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho" para tenerla por probada. En este caso el Magistrado, acertadamente, ha considerado que existen los datos suficientes para acreditar que la actora - hoy recurrida- fue víctima de violencia de género. Así lo razona tanto en el hecho probado quinto como en el fundamento de derecho en el que escribe que la actora interpuso denuncia por malos tratos en las dependencias de la Policía Nacional de Coslada contra su marido el día 2 de septiembre de 1990, refiriendo las amenazas de que era objeto; así como que inició los trámites de la separación, yéndose a vivir con sus hijos a Valladolid, donde don Teodosio los encontró y continuó con su conducta anterior, teniendo el hijo mayor que someterse a tratamiento psicológico debido a esa problemática familiar. Estos datos los extrae el Magistrado no solo de la denuncia, sino también de los informes médicos del Sr. Teodosio y del testimonio del hijo mayor, el más afectado aparentemente por estos problemas familiares. Para la Sala, al igual que para el Magistrado de instancia, tales datos son suficientes para considerar que la situación material por la que pasó la actora, de trasladarse a las actuales categorías jurídicas, constituiría una auténtica violencia de género. Ello supone que aplicando el antes transcrito apartado del artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tenga derecho la actora a la pensión de viudedad que reclama, aunque no hubiesen pactado los cónyuges pensión compensatoria en su momento y hayan transcurrido más de diez años entre la separación judicial y el fallecimiento del causante.

Como en todos los casos que desembocaron en las sentencias referenciadas, en el presente supuesto tampoco consta sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; o una orden de protección o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Téngase en cuenta que los hechos que refiere la parte actora en su demanda se remontan a un período de tiempo en el que el tratamiento legal dispensado a la violencia de género era inexistente, de suerte que no es razonable exigir la aportación de una sentencia, o bien una orden de protección dictada a su favor o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. No obstante, el propio artículo 174.2 de la LGSS aclara, como no podía ser de otro modo, que la condición de víctima de violencia de género puede acreditarse mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. No es cierto, por tanto, que el artículo 174.2 de la LGSS imponga un "númerus clausus" en orden a acreditar la condición de víctima de violencia de género, según la doctrina judicial expuesta. En el presente caso, la parte actora ha asumido el gravamen procesal





que le impone el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el propio artículo 174.2 de la LGSS y ha probado esa condición a través de consistentes medios de convicción. En primer lugar, la declaración de dos de los hermanos del propio causante, sin ningún interés en el resultado de la presente litis, reveló que el causante incurrió en conductas violentas y vejatorias contra su mujer y sus hijas y que lo hizo hasta el momento mismo de la separación. La hija de la actora (pero también del causante), reconoció esos mismos hechos. Adicionalmente, en los dos años previos a la separación judicial provisional, la actora dedujo varias denuncias por malos tratos. En el contexto de los procedimientos judiciales incoados, el causante reconoció haber abofeteado e insultado a la actora, hecho corroborado por un parte de lesiones. Poco antes de que se acordara la separación provisional, la actora dedujo una nueva denuncia por malos tratos en el mes de mayo de 1995 y ya anunció su intención de promover la separación de su cónyuge a la mayor brevedad posible, algo que se materializó en el mes de octubre. Por tanto, no cabe la menor duda de que la actora sufrió la condición de víctima de violencia de género, situación a la que sólo pudo poner fin mediante la separación judicial.

En consecuencia, procede estimar la demanda rectora del presente procedimiento, por cuanto la parte actora ha acreditado, conforme al artículo 174.2 de la LGSS, su condición de víctima de violencia de género al momento de la separación judicial. No obstante, la base reguladora será la indicada por la entidad gestora, por lo ya razonado en el fundamento jurídico primero.

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 190 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación, de lo que se advertirá a las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

FALLO

ESTIMO EN PARTE la pretensión de la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D^a TERESA BENAVENTE MORILLO contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en consecuencia, declaro el derecho de la actora a percibir una prestación de viudedad con efectos de 1 de noviembre de 2014, una base reguladora de 517,54 euros y un porcentaje del 52%. Condeno a la entidad gestora a estar y pasar por tal declaración y a abonar la prestación correspondiente, con los incrementos, revalorizaciones y mejoras que correspondan.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por





comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html	Codi Segur de Verificació: A841TC24DFORHV8G09AAHDD4JC34UE
Data i hora 22/11/2016 15:27	Signat per Fernández Pérez, Joan Manel

